

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

Ayuntamientos de la provincia.....	30 pts. año.
Particulares y colectividades.....	36 » »
Número suelto, dentro de su año.....	0,30 ptas.
» de años anteriores.....	0,50 » »

Se suscribe en la Intervención de la Diputación
La correspondencia oficial de los Ayuntamientos
debe dirigirse al señor Gobernador civil.



PRECIOS DE ANUNCIOS

De prendadas.....	0,50 pts. línea.
Subastas, vacantes, etc., de interés directo para los Ayuntamientos ..	0,80 » »
Providencias judiciales y cualesquiera otras clases de anuncios particu- lares.....	1,00 » »

EL PAGO ADELANTADO Y EN SANTANDER

BOLETIN OFICIAL

PROVINCIA DE SANTANDER

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DISPOSICIONES MINISTERIALES

Ministerio de Hacienda

El Presidente de la República Española,
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes Constituyentes han decretado y sancio-
nado la siguiente

LEY

Artículo 1.º La distribución de las participaciones en el rendimiento de la Patente nacional de Circulación de automóviles se realizará con sujeción a las normas que se expresan a continuación:

1.ª Del total de la cantidad recaudada durante cada semestre, en vista de los datos que, facilitados por las Delegaciones de Hacienda, se reúnan en la respectiva Dirección general, se aplicará un 50 por 100 al Estado, un 35 por 100 a distribuir entre los Ayuntamientos, en la forma que luego se determina, y un 15 por 100 a las Diputaciones provinciales.

2.ª Una vez determinadas las cantidades para cada grupo de partícipes, se hará la distribución del 35 por 100 correspondiente a todos los Ayuntamientos del territorio de régimen común y Ceuta y Melilla, ateniéndose a las prescripciones siguientes:

a) Serán considerados con derecho a participación en lo sucesivo los Ayuntamientos que lo tuvieron a tenor de los preceptos anteriores a esta Ley y los que la soliciten del Ministerio de Hacienda dentro de los cinco primeros meses del semestre al cual haya de contraerse la distribución del rendimiento de la Patente. Las solicitudes presentadas fuera de ese plazo no surtirán efecto hasta que se realice la distribución del rendimiento de la Patente en el semestre siguiente.

b) La aludida cantidad distribuible entre los Ayuntamientos se dividirá entre el número total de vehículos automóviles que figuren matriculados, en situación de alta, en los respectivos Municipios el día 1.º del primer mes del semestre al cual haya de contraerse la distribución del rendimiento de la Patente.

3.ª El 15 por 100 que corresponde a todas las Diputaciones provinciales de régimen común y Cabildos insulares de Canarias se dividirá en dos porciones iguales.

La primera porción, dividida por el número total de kilómetros de carretera y caminos vecinales en conservación a cargo de las Diputaciones y Cabildos insulares, dará el coeficiente por kilómetro.

La segunda porción, dividida por el número de automóviles matriculados en las provincias de régimen común, con deducción del 50 por 100 de los autos dedicados al servicio público, dará el coeficiente por automóvil.

El número de kilómetros de carreteras y caminos vecinales en conservación a cargo de las Diputaciones y Cabildos insulares y el de automóviles matriculados a que antes se alude serán, a los efectos de la distribución, los que figuren en las certificaciones que habrán de remitir las Delegaciones de Hacienda, referidas al día 1.º del primer mes del semestre al cual haya de contraerse la dicha distribución del producto de la Patente.

Para señalar el cupo correspondiente a cada Diputación se multiplicarán: el coeficiente por kilómetro, por el número de los que tengan las carreteras y caminos vecinales en conservación a cargo de la respectiva Corporación, y el coeficiente por automóvil, por el número de los matriculados en la provincia. Y la suma de ambos productos constituirá el cupo dicho.

4.ª A los efectos de las normas precedentes, se entenderán matriculados los vehículos en el término municipal en que su dueño haya domiciliado el pago de la Patente respectiva.

Artículo 2.º Para compensar a las Diputaciones que venían cobrando el impuesto por Patente de automóviles desde sus comienzos, el cual constituía para ellas un ingreso de carácter permanente, se mantendrán intactas las cifras repartidas en el año 1931. La diferencia entre estas cifras y las que puedan corresponder por cupo, con arreglo a los coeficientes que en esta Ley se indican, se equilibrará con cargo al 50 por 100 que se asigna al Estado, dándose con cargo al mismo 50 por 100 la participación correspondiente al segundo semestre de 1932 a las provincias que tengan consignadas en sus presupuestos actuales dichas participaciones.

Artículo 3.º Quedan subsistentes las disposiciones contenidas en el Real decreto de 11 de Abril de 1928, convalidado por la Ley de 9 de Septiembre de 1931, que no se opongan a las de la presente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. El nuevo régimen comenzará a partir de 1.º de Enero de 1933.

Segunda. Mientras subsistan las Juntas administrativas de Obras públicas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas se abonará a cada una de ellas, en concepto de participación en la Patente nacional de Circulación de automóviles, la cantidad que resulte de multiplicar el número de tales vehículos matriculados dentro de la respectiva jurisdicción por el coeficiente que se obtenga de dividir el importe del 25 por 100 del rendimiento de la dicha Patente en la totalidad de las provincias de régimen común, que estaba destinado al suprimido Patronato del Circuito Nacional de Firms Especiales, entre todos los automóviles matriculados en esas mismas provincias.

Las sumas que a tenor de esta disposición sean abonadas a las referidas Juntas serán detraídas de la participación del Estado en el rendimiento de la Patente.

Por tanto:

Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cumplimiento de esta Ley, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la hagan cumplir.

Madrid, veintidós de Junio de mil novecientos treinta y dos.—Niceto Alcalá-Zamora y Torres.—El Ministro de Hacienda, Jaime Carner Roméu.

Presidencia del Consejo de Ministros

Junta calificadora de aspirantes a destinos públicos

En cumplimiento de la Ley de 11 de Marzo último («Gaceta» número 73), se formula la propuesta provisional que a continuación se expresa, correspondiente al mes de Enero del año actual, de los destinos vacantes dependientes de las Diputaciones, Ayuntamientos y Cabildos, cuyos destinos fueron publicados en la «Gaceta» número 1 del día 1.º de dicho mes. En ellas se expresan las clases de primera y segunda categoría y de la Armada, a quienes se proponen, por ser los que mayores méritos reúnen, a juicio de las Autoridades expresadas, entre los presentados para optar a dichos destinos en las respectivas Corporaciones.

PROVINCIA DE SANTANDER

63. Cartero de Espinama, Cabo Toribio Suárez Calderilla, con 5-1-29 de servicio. (Sexto grupo.)

64. Cartero de Las Rozas. Desierto.

65. Cartero de Santibáñez de Carriedo, Cabo Joaquín Arroyo García, con 2-11-18 de servicio. Sexto grupo, preferencia de interinidad).

66. Cartero de Allén del Hoyo, Cabo Salustiano Montes Peña, con 5-9-29 de servicio. (Sexto grupo, preferencia de herido en campaña).

Ayuntamiento de Enmedio

149. Portero, Alguacil y Agente ejecutivo, Sargento licenciado Manuel Oriol Sáez, con 3-10-0 de servicio y 1-1-0 de empleo. (Sexto grupo).

Madrid, 22 de Junio de 1932.—El Presidente, Agustín Luque.

(«Gaceta» del 25 de Junio).

Ministerio de Obras públicas

DECRETO

Con fecha 29 de Febrero del corriente año dictó el Ministerio de Obras públicas una Orden prohibiendo a las Compañías de ferrocarriles e igualmente a los Centros ministeriales, la concesión de billetes de favor para viajar por las líneas férreas, basándose dicha Orden en la escandalosa prodigalidad con que se venían otorgando billetes gratuitos y otros a precios excepcionalmente bajos, dentro de un injustificado favoritismo que originaba considerable merma en los ingresos de Empresas auxiliares económicamente por el Estado. Esa disposición debe confirmarse y completarse en forma que, además de quedar garantida su perdurabilidad, se fijen más claramente aún los contornos de la prohibición, a fin de evitar que el abuso retoñe.

En virtud de esas consideraciones, a propuesta del Ministro de Obras públicas y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Confirmando la Orden dictada por el Ministerio de Obras públicas el 29 de Febrero del corriente año, se prohíbe a las Compañías de ferrocarriles e igualmente a todos los Centros ministeriales, la concesión de billetes gratuitos para viajar por las líneas férreas. Asimismo se prohíbe a las Compañías expedir billetes con rebaja excepcional de precios que no figure en las respectivas tarifas, salvo los casos que pudiera autorizar el citado Ministerio. Se exceptúan de estas prohibiciones los billetes destinados a los agentes ferroviarios y a sus familias, quienes seguirán disfrutando como hasta aquí de ese beneficio. También se exceptúan los billetes de caridad.

Artículo 2.º Todos los billetes de libre circulación o cualesquiera otros pases gratuitos extendidos con fecha anterior a la de la publicación de este Decreto en la «Gaceta de Madrid», por el Ministerio de Obras públicas, por otros Centros ministeriales o por las Compañías de ferrocarriles, salvo los mencionados en el artículo 4.º, caducarán el día 30 del corriente mes de Junio. Esta caducidad no afecta a los billetes de los Diputados que costean las Cortes Constituyentes.

Artículo 3.º En lo sucesivo no será válido ningún billete de libre circulación si no lleva la firma del Director general de Ferrocarriles, único funcionario del Estado que en delegación del Ministro de Obras públicas, tiene competencia para autorizar esta clase de billetes.

Artículo 4.º Las Compañías remitirán a la Dirección de Ferrocarriles relación de las personas que, por estar a su servicio, hayan de poseer billetes de libre circulación, bien para la totalidad de las líneas o para determinadas zonas. Estos billetes, aunque concedidos por las respectivas Compañías, necesitarán el refrendo del Director general de Ferrocarriles. Los ahora vigentes caducarán el 15 de Julio próximo.

Artículo 5.º Se proveerá de pases de libre circulación, extendidos por el Ministerio de Obras públicas, a los Ministros y funcionarios del Estado que figuran en la relación adjunta a este Decreto. No podrá otorgarse billete de libre circulación ferroviaria a ningún otro funcionario del Estado sin previa orden del Ministro de Obras públicas autorizándolo, orden que habrá de publicarse en la «Gaceta de Madrid».

Artículo 6.º La Dirección general de Ferrocarriles, a propuesta del Ministro de la Gobernación, extenderá y autorizará los billetes de libre circulación que necesite el Cuerpo de Telégrafos para inspección y vigilancia de los servicios encomendados a este Cuerpo. Queda prohibido

viajar en los vagones postales a funcionarios de Correos que no vayan precisamente prestando servicio, siendo necesarios cuantos permisos o autorizaciones temporales o permanentes hayan podido concederse para viajar en los citados vagones.

Artículo 7.º Los funcionarios del Cuerpo de Vigilancia podrán ir en los trenes sin más requisito que la exhibición del carnet e insignias del cargo y en su caso orden del Director general o Jefes superiores acreditando la necesidad del servicio.

Las mismas facilidades tendrán, con idénticos requisitos, los Inspectores generales de Prisiones y los de Trabajo, dentro de sus respectivas demarcaciones los Inspectores provinciales de Sanidad y los Delegados de Trabajo. Los jefes y Oficiales del Cuerpo de Carabineros podrán viajar en los trenes de las zonas fronterizas y del litoral en las condiciones que venían haciéndolo hasta ahora.

Artículo 8.º El uso de los pases innominados que para servicios imprevistos de algunos Ministerios figuran en la relación adjunta, habrá de ser autorizado por orden expresa que firmarán el Ministro o Subsecretario respectivo o el Secretario general de S. E. el Presidente de la República.

Artículo 9.º Las infracciones, por parte de las Compañías, de lo dispuesto en este Decreto, serán castigadas con multas de 5.000 a 50.000 pesetas.

Artículo 10. Quedan especialmente encargados de vigilar el cumplimiento de este Decreto los Interventores del Estado en la explotación de Ferrocarriles, a quienes se impone la obligación, siempre que viajen, de controlar la revisión efectuada en ruta por los empleados de las Compañías. Los Interventores del Estado recogerán los billetes o pases que no estén debidamente autorizados y los remitirán al Director general de Ferrocarriles con la correspondiente denuncia, en que se expresará el nombre del viajero y el tren en que iba. Igualmente cuidarán de que en los vagones postales no viajen sino los funcionarios de Correos que lo hagan por razón de su servicio. Asimismo inspeccionarán las expendedorías de billetes para examinar los que hayan sido extendidos en virtud de autorizaciones.

Artículo 11. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Dado en Madrid, a veintidós de Junio de mil novecientos treinta y dos.—Niceto Alcalá-Zamora y Torres.

El Ministro de Obras públicas.—Indalecio Prieto Tuero.

RELACIÓN DE BILLETES DE LIBRE CIRCULACIÓN QUE SERÁN AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE FERROCARRILES

Pases de Gobierno, de libre circulación

Presidente del Consejo de Ministros, Presidente de las Cortes y Ministros, cada uno con dos personas que les acompañen.

Presidente del Tribunal Supremo y Fiscal general de la República.

Presidente del Consejo de Estado y Tribunal de Cuentas.

Subsecretarios de los Ministerios.

Directores generales.

Interventor general de la Administración del Estado.

Secretario general de S. E. el Presidente de la República.

General Jefe del Cuerpo Militar de S. E. el Presidente de la República.

Generales Inspectores del ejército.

Generales Jefes de las Divisiones del Ejército.

Pases de alta inspección, de libre circulación.

Subsecretario del Ministerio de Obras públicas.

Directores generales de Ferrocarriles, Caminos y Obras hidráulicas.

Presidente y Vocales del Consejo Superior de Ferrocarriles.

Presidente y Vocales del Consejo de Obras públicas.

Pases de inspección A, de libre circulación

Interventores del Estado en la Explotación de Ferrocarriles.

Ingeniero Jefe, segundos Jefes Ingenieros de las Divisiones de Ferrocarriles.

Pases de inspección B, de libre circulación limitada al territorio de sus servicios y hasta la capital en que radique la Jefatura.

Ayudantes y Sobrestantes al servicio de las Divisiones de Ferrocarriles.

Pases de servicio

A., de libre circulación:

Ministerio de Justicia

Teniente fiscal del Tribunal Supremo, Inspector fiscal y Secretario de la Inspección fiscal.

Dós Arquitectos de Prisiones.

Ministerio de Obras públicas

Ingeniero Jefe del Servicio de Puentes y Sondeos.

Ingeniero Jefe del Servicio de Señales Marítimas.

Ingeniero Jefe del Servicio Central de Planes hidráulicos.

Dos encargados de los coches salones del Ministerio.

Ministerio de Hacienda

Cuatro nominativos para funcionarios de la Inspección de Aduanas.

B., de circulación limitada al territorio de su demarcación:

Ministerio de Estado

Tres nominativos para los encargados de las valijas del Ministerio en los trayectos que se señalen.

Ministerio de Justicia

Presidentes de las Audiencias territoriales y provinciales (los de territorial hasta Madrid).

Fiscales de las Audiencias territoriales y provinciales (y hasta Madrid).

Jueces de primera instancia e instrucciones y Secretarios de estos Juzgados (y hasta la capital de su provincia y de la Audiencia territorial).

Ministerio de Marina

Capitanes generales de los Departamentos (y hasta Madrid).

Ministerio de la Gobernación

Gobernadores civiles (y hasta Madrid).

Ministerio de Obras públicas (y hasta Madrid todos)

Ingenieros Jefes de las Jefaturas de Estudios y Construcción de ferrocarriles.

Ingenieros Jefes de las Divisiones Hidráulicas y de las Mancomunidades Hidrográficas.

Ministerio de Trabajo y Previsión

Médicos Inspectores de la Comisaría del Seguro obligatorio en sus demarcaciones.

Pases diplomáticos

Embajadores y Ministros Plenipotenciarios, a condición de reciprocidad en los respectivos países a favor de nuestros Diplomáticos.

Pases al portador (con uso de regulado por el artículo 8.º del Decreto de esta fecha).

Dos pases de esta clase para la Presidencia del Consejo de Ministros, dos para el Ministerio de Justicia, tres para el de Hacienda, tres para el de Gobernación, dos para el de Instrucción pública, dos para el de Trabajo, tres para el de Agricultura y cuatro para el de Obras públicas, y dos para la Secretaría general de la Presidencia de la República.

Madrid, 22 de Junio de 1932.—Indalecio Prieto Tuero.

Ministerio de Trabajo y Previsión

DECRETO

De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Trabajo y Previsión,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la ejecución de la Ley de 13 de Mayo de 1932 estableciendo las Delegaciones provinciales de Trabajo.

Dado en Madrid a veintitrés de Junio de mil novecientos treinta y dos.—Niceto Alcalá-Zamora y Torres.—El Ministro de Trabajo y Previsión, Francisco L. Caballero.

Reglamento para la ejecución de la Ley de 13 de Mayo de 1932, estableciendo las Delegaciones provinciales de Trabajo

CAPITULO PRIMERO

De los Delegados de Trabajo y de los Auxiliares de las Delegaciones.

SECCIÓN PRIMERA

De los Delegados de Trabajo y sus funciones.

Artículo 1.º Como dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión se organizará en cada capital de provincia una Delegación provincial de Trabajo a cargo de un Delegado, que será en la respectiva demarcación el Jefe superior inmediato de todos los servicios de la Administración encomendados al mencionado Departamento ministerial. La dirección e inspección de dichas Delegaciones se ejercerá con sujeción a este Reglamento.

Artículo 2.º El Delegado de Trabajo ostentará en la provincia respectiva la representación del Ministerio y será en ella la Autoridad superior en este orden para toda intervención del Poder público encaminada a resolver los conflictos del trabajo, siendo obligación de las demás Autoridades de cualquier ramo prestarle la asistencia y el concurso que solicite de ellas para su actuación, conforme a las disposiciones de este Reglamento. Los Delegados provinciales dependerán directamente de la Dirección general de Trabajo y tendrá a sus órdenes a los Auxiliares de Trabajo y demás funcionarios dependientes de los organismos del Ministerio de Trabajo y Previsión establecidos en sus demarcaciones respectivas.

Artículo 3.º Además de las facultades especiales que las leyes conceden a los Delegados de Trabajo, pasarán a ellos todas las atribuciones que la actual legislación de trabajo concede a los Gobernadores civiles, bien con este

carácter, bien con el de Presidente de las Delegaciones provinciales del Consejo de Trabajo. Asimismo pasarán a los Delegados provinciales de Trabajo las funciones y atribuciones asignadas a los Inspectores regionales del Trabajo en los Reglamentos vigentes.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la autoridad que corresponde a los Gobernadores civiles como representantes del Gobierno en cada provincia.

Artículo 4.º Las condiciones que han de reunir los que aspiren al cargo de Delegados provinciales de Trabajo son: Primera. Ser español, mayor de veintitrés años, estar en pleno uso de sus derechos civiles y no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos. Segunda. Tener la competencia necesaria, justificada en la forma que determina este Reglamento.

Artículo 5.º Los Delegados provinciales de Trabajo se clasificarán en tres categorías: Delegados de primera, con el sueldo anual de 12.000 pesetas de entrada; Delegados de segunda, con el sueldo anual de 10.000 pesetas de entrada; Delegados de tercera, con el sueldo anual de 7.000 pesetas de entrada.

Por cada cinco años de servicios tendrán todos ellos un aumento de sueldo de 1.000 pesetas anuales, sin que en ningún caso pueda el sueldo exceder de 18.000 pesetas.

Artículo 6.º El Ministro de Trabajo, atendiendo a las necesidades de los servicios y con sujeción a las plantillas que figuran en el presupuesto, hará la distribución de los funcionarios de los Cuerpos de Delegados y de Auxiliares en las provincias y en las poblaciones de Ceuta y de Melilla.

Artículo 7.º En las demarcaciones territoriales en que haya más de un Delegado de Trabajo será el Jefe de la Delegación el que tenga más categoría, y a él le corresponderá, previa aprobación del Ministerio, coordinar los servicios de los Delegados que han de actuar, a sus órdenes. Estos Delegados sustituirán interinamente y por orden de categorías al Jefe de la Delegación en casos de enfermedad, ausencia, licencia o vacante. El Ministro podrá, no obstante, facultar a un Delegado de cualesquiera categoría y destino para que actúe con las atribuciones de Delegado autónomo en una determinada comarca o para una función especial.

Artículo 8.º Corresponde a los Delegados provinciales de Trabajo, según lo dispuesto en la ley de Asociaciones profesionales:

- a) Llevar el Registro de las Asociaciones profesionales obreras y patronales de su provincia, con arreglo a las disposiciones vigentes en esta materia.
- b) Examinar los Estatutos y Reglamentos de las citadas Asociaciones.
- c) Poner reparos a los Reglamentos y Estatutos que adolezcan de defectos legales.
- d) Ordenar la inscripción de las Asociaciones que hayan cumplido los preceptos legales.
- e) Tramitar los recursos que se presenten contra los reparos que hayan puesto a los Estatutos y Reglamentos de las Asociaciones profesionales.
- f) Examinar las modificaciones de los Estatutos y Reglamentos que presenten dichas Asociaciones.
- g) Autorizar aquellas de dichas modificaciones que se ajusten a las leyes.
- h) Poner reparos a las que adolezcan de defectos legales y tramitar los recursos que se entablen contra las mismas.
- j) Habilitar los libros-registros de socios.

k) ciales, pruebe
l) los Dir que, el áculos precep
m) en la le me a la
n) tengán Asociac
o) nes pi puest
p) ñ) de Tra das o C
q) Artí de acu t. s. t: r
r) a) de dich clamar
s) b) en los los cita
t) c) de trab los Jur
u) d) organis e) pensión mixtos no sea produz
v) f) rados g) acuerd por los
w) h) to de a sicione los inte
x) Artí interve bajo re do las ción, le a que o jo cele de la A alguna pacto d dica ul lidades drá pa mentar
y) Artí ley de pondrá pectiva nes ins

k) Inspeccionar las Asociaciones en sus domicilios sociales, examinando sus libros y la documentación que con- prueben sus asientos.

l) Poner multas de 50 a 150 pesetas a cada uno de los Directores o socios de las Asociaciones profesionales que, ejerciendo cargos de gobierno en ellas, pongan obstáculos a la labor inspectora o dejen de cumplir cualquier precepto de la ley de Asociaciones profesionales.

m) Suspender las Asociaciones en los casos previstos en la ley Orgánica de Asociaciones profesionales, conforme a las normas en aquélla consignadas.

n) Pasar el tanto de culpa a los Tribunales cuando tengan noticia de que se ha cometido algún delito en una Asociación profesional.

o) Tramitar e informar los recursos que las Asociaciones presenten contra las sanciones que se les hayan impuesto.

p) Nombrar una Comisión gestora para los contratos de Trabajo de las Asociaciones que hayan sido suspendidas o disueltas.

Artículo 9.º Los Delegados provinciales de Trabajo, de acuerdo con lo preceptuado en la ley de Jurados mixtos, tendrán las siguientes facultades:

a) Presidir el escrutinio de las elecciones de Vocales de dichos organismos establecidos en su jurisdicción y proclamar a los candidatos que resulten elegidos.

b) Tramitar e informar las protestas que se formulen en los expedientes electorales relativos a la constitución de los citados organismos.

c) Informar los recursos presentados contra las bases de trabajo o acuerdos de carácter general aprobados por los Jurados mixtos de su jurisdicción.

d) Imponer multas, a propuesta de los mencionados organismos, a los infractores de sus acuerdos.

e) Proponer al Ministro de Trabajo y Previsión la suspensión en el ejercicio de sus funciones de los Jurados mixtos que hubiesen adoptado acuerdos en materia que no sea de su competencia, alteren el sosiego público o produzcan alarmas o conflictos.

f) Ejercer funciones de Ordenador de pagos de los Jurados mixtos de su demarcación.

g) Resolver los recursos que se interpongan contra acuerdos administrativos de carácter individual tomados por los jurados mixtos.

h) Adoptar las resoluciones legales oportunas respecto de acuerdos de Jurados mixtos que, sin infringir disposiciones legales, puedan ocasionar lesión o quebranto a los intereses de la industria.

Artículo 10. Los delegados provinciales tendrán la intervención que se consigna en la ley de Contrato de Trabajo respecto a la celebración de pactos colectivos. Cuando las Autoridades competentes suspendan alguna Asociación, los Delegados intervendrán en todos los incidentes que dé lugar el cumplimiento de los contratos de trabajo celebrados por dicha entidad; y cuando por disposición de la Autoridad o por voluntad de sus socios se disuelva alguna Asociación o entidad que hubiese celebrado un pacto de trabajo, el Delegado determinará la norma jurídica ulterior y la forma de hacer efectivas las responsabilidades consiguientes, si las hubiere, y asimismo intervendrá para asegurar el cumplimiento de lo prevenido reglamentariamente para el caso de disolución.

Artículo 11. En cumplimiento de lo dispuesto en la ley de Colocación obrera, los Delegados de Trabajo pondrán al Ministerio de Trabajo y Previsión la terna respectiva para la designación de Presidente de las Comisiones inspectoras en las oficinas locales y regionales de Co-

locación obrera, cuando no haya acuerdo para su nombramientos entre los representantes obreros y patronales.

Artículo 12. Los Delegados provinciales de Trabajo, en relación con la Inspección del Trabajo, tendrán las facultades que se les señalan en los artículos 31 y 63 de este Reglamento.

Artículo 13. Los Delegados provinciales de Trabajo presidirán las Delegaciones provinciales del Consejo de Trabajo, correspondiéndoles todas las demás funciones que concede a los Presidentes de estas Delegaciones provinciales el Reglamento orgánico de 19 de Junio de 1930.

Artículo 14. Los Delegados provinciales de Trabajo presidirán las Juntas de Casa baratas que se establezcan en las capitales de sus respectivas provincias, e inspeccionarán y fomentarán las Juntas de Casas baratas que se constituyan en otras localidades de su demarcación, desempeñando en este respecto las demás atribuciones que conceden a los presidentes de dichas Juntas las disposiciones legales relativas a la materia.

Artículo 15. Como órganos de información corresponden a los Delegados de Trabajo, Presidentes de las Delegaciones provinciales del Consejo de Trabajo, la formación de estadísticas de accidentes del trabajo ocurridos en su demarcación; las de huelgas y «lockouts» planteados en ella; las de precios medios, subsistencia, salarios y demás particulares de esta índole que tengan carácter social.

Los Delegados elevarán, en los dos primeros meses de cada año, al Ministerio de Trabajo y Previsión, una Memoria referente al desenvolvimiento económico y social de sus provincias.

Artículo 16. Corresponde a los Delegados provinciales del Trabajo velar especialmente por el cumplimiento de las disposiciones relativas a los accidentes del trabajo, y en tal sentido se tramitarán ante ellos las reclamaciones e informaciones administrativas concernientes a dichas materias, de que hasta ahora conocían los Gobiernos civiles. Asimismo serán los encargados de solicitar los dictámenes de las Academias de Medicina, en caso de que sean contradictorios los informes de los Médicos que hayan intervenido en la calificación de un accidente que haya motivado la reclamación de que conozcan.

Artículo 17. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 29 de Mayo de 1931, al que dió carácter de Ley la de 9 de Septiembre del mismo año, los Delegados provinciales de Trabajo deberán intervenir, procurando resolverlos, en los conflictos sociales que ocurran en su jurisdicción, y cuyo conocimiento no corresponda a Jurado mixto constituido.

A este efecto, cuando tengan conocimiento de que un grupo o una Asociación de obreros de una actividad agrícola, industrial o comercial, no sometida a la jurisdicción de algún Jurado mixto, ha presentado una reclamación colectiva a un patrono o a un grupo de patronos o viceversa, y que con motivo de ella puede producirse una perturbación, los Delegados de Trabajo convocarán inmediatamente a quienes ostenten la representación de los patronos y de los obreros interesados en la cuestión, y les invitarán a que sometan ésta a la resolución de un árbitro que merezca la confianza de ambas partes. Si no se lograse este fin, el Delegado, o en su caso la Autoridad que le sustituya, invitará a las partes a que hagan la designación de representantes autorizados para discutir y resolver, bajo su presidencia, sobre los términos de la discordia. Las resoluciones que se dictaren por cualquiera de los procedimientos indicados, no podrán perjudicar a ninguna de las partes en las condiciones de trabajo establecidas por la Ley o por las bases que se hallaren en vigor y

hayan sido adoptadas por Jurados mixtos o por otros organismos legales, competentes, y dichas resoluciones tendrán el valor de normas aclaratorias o complementarias de aquéllas.

Si por negarse a concurrir alguna de las partes, o por cualquier otra causa no se llegase a una resolución por los procedimientos indicados anteriormente, se entenderán subsistentes, para la regulación del trabajo en el sector industrial de que se trate, las condiciones impuestas por la Ley y las adoptadas legalmente por los organismos paritarios o por los contratos individuales que se ajusten a ellas; y cualquiera acción encaminada a perturbar la libertad de trabajo en tales condiciones, se considerará ilícita y los promotores, inductores o autores serán sometidos a la Autoridad judicial o gubernativa, según los casos. En estas circunstancias, los Delegados provinciales de Trabajo, previa consulta con la Dirección general de Trabajo, pondrán término a su intervención en el conflicto comunicando su inhibición al Gobernador civil, y desde este momento corresponderá actuar en el asunto a las Autoridades encargadas de velar por el orden público.

Los Delegados provinciales de Trabajo podrán imponer multas hasta 500 pesetas a quienes, convocados por ellos a los fines indicados, no acudieren a las citas.

En el caso de que los obreros o patronos que presenten las reclamaciones colectivas pertenezcan a algún sector sometido a la jurisdicción de un Jurado mixto, se cumplirá lo dispuesto en el capítulo X de la ley de Jurados mixtos, por cuya observancia velarán los Delegados de Trabajo.

Artículo 18. Corresponderá a los Delegados provinciales, como representantes inmediatos del Ministerio de Trabajo y Previsión, cumplir las órdenes que por el mismo se le comunique, emitir los informes que se le pidan y ejercer todas las demás funciones que le encomiende o puedan encomendarle las Leyes y las resoluciones del Gobierno.

Artículo 19. Los Delegados de Trabajo vendrán obligados a dar inmediatamente y por escrito conocimiento al Gobernador civil de sus respectivas provincias de todos los conflictos sociales o perturbaciones económicas de que tengan noticia y ocurran en su jurisdicción, así como también, y en término de tres días, de los fallos y demás resoluciones que dicten.

SECCIÓN SEGUNDA

Auxiliares de las Delegaciones provinciales de Trabajo.

Artículo 20. A las órdenes inmediatas de los Delegados provinciales de Trabajo habrá un Cuerpo de Auxiliares, cuyas funciones serán hacer el extracto de los expedientes, la clasificación y archivo de documentos, los apuntamientos de los juicios en que hayan de entender los Delegados y cuantos trabajos de esta naturaleza éstos les encomienden.

Artículo 21. Para aspirar a los cargos de Auxiliares de las Delegaciones de Trabajo se requerirá ser español, mayor de veintiún años de edad, hallarse en pleno goce de los derechos civiles, no estar inhabilitado para ejercer cargo público y demostrar la competencia adecuada en la forma que se determina en este Reglamento.

Artículo 22. Los auxiliares de las Delegaciones de Trabajo tendrán el sueldo de 4.000 pesetas anuales y un aumento de 500 pesetas por cada cinco años de servicios.

El Ministerio de Trabajo, de conformidad con las normas legales en vigor, señalará la plantilla de Auxiliares de las Delegaciones de Trabajo.

Artículo 23. Los cargos de Delegado provincial de

Trabajo y de Auxiliar de las Delegaciones serán incompatibles con el ejercicio de todo empleo, oficio o profesión.

CAPITULO II

De la Inspección de Trabajo

SECCIÓN PRIMERA

Organización del Servicio de Inspección

Artículo 24. La Inspección del Trabajo se ejercerá por los funcionarios y entidades que a continuación se indica: Director general de Trabajo, Subdirector general de Trabajo, Servicio Central de la Inspección del Trabajo, Delegados provinciales de Trabajo, Inspectores provinciales y Auxiliares y los Vocales inspectores de los Jurados mixtos de Trabajo.

En casos especiales, y tratándose de industrias o establecimientos que no estén sometidos a la jurisdicción de un Jurado mixto determinado, ejercerán también las funciones de inspección, como elementos auxiliares de la misma, las Delegaciones del Consejo de Trabajo.

La función inspectora inmediata en los trabajos de las minas, salvo la técnica de la explotación, será ejercida por los Inspectores provinciales y por Inspectores auxiliares mineros.

Artículo 25. El servicio Central de la Inspección del Trabajo depende de la Dirección general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión, según lo dispuesto en el Decreto de 3 de Noviembre de 1931 y disposiciones concordantes.

Artículo 26. Las condiciones que habrán de reunir los que aspiren a los cargos de Inspectores provinciales o auxiliares serán las siguientes:

1.^a Ser español, mayor de veintitrés años, estar en el pleno uso de sus derechos civiles y no hallarse inhabilitado para ejercer cargo público.

2.^a Tener la instrucción o la competencia necesaria, justificadas en la forma que determina este Reglamento.

Artículo 27. Los Inspectores provinciales de Trabajo tendrán el sueldo anual de entrada de 7.000 pesetas y un aumento de 1.000 pesetas por cada cinco años de servicios.

El Ministro de Trabajo, de conformidad con las normas legales en vigor, señalará la plantilla de Inspectores provinciales del Trabajo.

Artículo 28. Los Inspectores Auxiliares del Trabajo tendrán el sueldo de 4.000 pesetas anuales, con un aumento de 500 pesetas por cada cinco años de servicios.

El Ministerio de Trabajo, de conformidad con las normas legales en vigor, señalará la plantilla de Inspectores Auxiliares de Trabajo.

SECCIÓN SEGUNDA

Funciones de la Inspección

Artículo 29. Será misión esencial de la Inspección del Trabajo velar por el cumplimiento de las disposiciones legales referentes a las condiciones del trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión.

La Inspección del Trabajo, además de esta función esencial, podrá realizar otras de aportación de datos de experiencia y de informe, siempre que sean compatibles con la labor específica indicada, estén relacionados con ella y no comprometan en modo alguno la autoridad y la imparcialidad de los Inspectores.

Estas funciones complementarias se realizarán siempre por los Inspectores previa orden especial de sus supe-

rios.
mentar.
Artí
pección
1.^o
de Insp
2.^o
ustria
el cum
por inf
que ha
3.^o
ridad p
tores.
4.^o
mación
5.^o
así co
que se
brá de
del ser
tados,
sultado
Inspecc
6.^o
los co
ciales.
Artí
les del
1.^o
de los
person
dene e
podrán
ñar po
2.^o
la form
3.^o
pector
do cue
sean c
4.^o
del Se
mentos
5.^o
pecció
provin
6.^o
más a
tral, o
ros ais
neces
7.^o
a)
la pro
b)
por to
c)
lan en
d)
8.^o
sus vi
Trabaj
Artí
ciales:
1.^o
pondi

riores jerárquicos y con sujeción a las disposiciones reglamentarias.

Artículo 30. Corresponde al Servicio Central de Inspección del Trabajo:

1.º La organización y vigilancia de todos los servicios de Inspección y el informe de cuanto se relacione con ellos.

2.º El informe de los expedientes de instalación de industrias o modificaciones de las existentes en relación con el cumplimiento de las leyes sociales, el de los incoados por infracción en los casos que corresponda y el de los que hayan sido apelados por las partes interesadas.

3.º Realizar las visitas que se le ordenen por la Superioridad para vigilar y comprobar los servicios de los Inspectores.

4.º Reunir y clasificar los datos precisos para la formación de estadísticas.

5.º La redacción y publicación de una Memoria anual, así como la de aquellos documentos de divulgación que se estimen de interés general. En dicha Memoria habrá de resumir los datos relativos a la actividad y eficacia del servicio, con indicación de los Centros de trabajo visitados, infracciones advertidas, sanciones impuestas y resultado de la experiencia que interesen a la finalidad de la Inspección.

6.º El informe sobre los recursos de alzada interpuestos contra las sanciones por infracciones de las leyes sociales.

Artículo 31. Corresponde a los Delegados provinciales del Trabajo en su función inspectora:

1.º Ejercer en sus provincias respectivas la inspección de los establecimientos que consideren necesario visitar personalmente, así como también la de aquellos que le ordene el Servicio Central de Inspección. En estas visitas podrán, cuando lo juzguen conveniente, hacerse acompañar por el Inspector provincial.

2.º Imponer las sanciones y tramitar los recursos en la forma preceptuada en este Reglamento.

3.º Dirigir, vigilar y centralizar el servicio de los Inspectores provinciales, reprendiendo las faltas leves y dando cuenta al Servicio Central de Inspección cuando éstas sean continuadas o graves.

4.º Servir de intermediarios para transmitir órdenes del Servicio Central de Inspección y dar curso a los documentos procedentes de los Inspectores provinciales.

5.º Remitir anualmente al Servicio Central de la Inspección relaciones conceptuadas acerca de los Inspectores provinciales.

6.º Informar acerca de los accidentes del trabajo y demás asuntos que les sean señalados por el Servicio Central, o por denuncias de agrupaciones obreras, o por obreros aislados, trasladándose, cuando se crea oportuno o sea necesario, al lugar en que el accidente hubiera ocurrido.

7.º Remitir al Servicio Central:

a) Memorias anuales acerca del servicio realizado en la provincia.

b) Estado expresivo de los establecimientos visitados por todos conceptos durante el año.

c) Estado expresivo de los establecimientos que existan en la provincia.

d) La documentación de contabilidad.

8.º Determinar los itinerarios que han de realizar en sus visitas de inspección los Inspectores provinciales de Trabajo.

Artículo 32. Corresponde a los Inspectores provinciales:

1.º Ejercer la inspección en su demarcación correspondiente.

2.º Tener al corriente al Delegado de Trabajo de la ejecución y cumplimiento de las leyes sociales en dicha demarcación.

3.º Informar acerca de los accidentes del trabajo que les sean especialmente señalados, trasladándose al lugar del suceso para verificar las informaciones necesarias.

4.º Informar a los Delegados de Trabajo de las reclamaciones que se les haga y de las dificultades que encuentren en sus visitas.

5.º Asistir a las sesiones de las Corporaciones de que formen parte y realizar en ellas los trabajos técnicos propios de su representación.

Artículo 33. Corresponde a los Inspectores auxiliares:

1.º Realizar los servicios que les encarguen los Delegados del Trabajo o los Inspectores provinciales y ejercer las funciones correspondientes en el punto de su residencia o en aquel adonde se traslade y no haya Inspector. En este último caso podrá dirigirse a las Autoridades locales y corresponderán al Inspector provincial todas las atribuciones relacionadas con la penalidad.

2.º Desempeñar, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, con carácter interino y durante el tiempo que se determine, las Inspecciones provinciales para las que los designe el Director general de Trabajo, ejerciendo durante esta interinidad las funciones de los Inspectores a quienes substituyan. La apreciación de estos extremos la hará el Delegado de Trabajo correspondiente. Todas las comunicaciones de los Inspectores auxiliares serán dirigidas por conducto del Inspector provincial; podrán, no obstante, dirigirse directamente al Delegado de Trabajo o a la Superioridad cuando sus reclamaciones sean desatendidas por sus Jefes inmediatos.

Artículo 34. Todos los que desempeñen alguna función inspectora de trabajo tendrán el carácter de Autoridad pública, tanto a los efectos de la responsabilidad imputable a quien cometa atentados contra sus personas o las haga objeto de actos o palabras ofensivas para su prestigio, ya en funciones del servicio, ya fuera de ellas, pero con ocasión de las mismas, como para los efectos de la responsabilidad en que el Inspector pudiera incurrir por extralimitarse en sus funciones.

Artículo 35. Los cargos de Inspectores auxiliares serán incompatibles con el ejercicio de todo empleo, oficio o profesión.

SECCIÓN TERCERA

Ejercicio de la inspección

Artículo 36. Será pública la acción para denunciar el incumplimiento de las leyes sociales y, en su consecuencia, los inspectores acogerán con todo interés las denuncias que se les presenten y que siempre han de ser consideradas como confidenciales, procediendo a su comprobación, según las disposiciones vigentes, y guardando el mayor secreto respecto al origen de aquéllas.

La reiterada inexactitud de las denuncias podrá eximir a los Inspectores de la obligación de atender las sucesivas que procedan del mismo origen.

Artículo 37. En el ejercicio de sus funciones, el personal de la Inspección del Trabajo observará la mayor cortesía con los patronos, recordándoles, cuando sea necesario, los deberes que les imponen las Leyes y Reglamentos tutelares del obrero y apoyando sus razones en los textos legales.

Artículo 38. Se prohíbe a los Inspectores aceptar el hospedaje que les sea ofrecido por los patronos sujetos a su vigilancia y aceptar de éstos regalos de ninguna clase.

Artículo 39. La misión de los Inspectores debe tener un carácter preventivo tanto como represivo, teniendo en cuenta que la legislación se dirige a proteger al obrero, pero sin causar vejaciones a la industria, y que los Inspectores habrán de inspirarse en este concepto sin desposeerse de la autoridad que es aneja e indispensable al cumplimiento de sus deberes. En sus visitas escucharán las puejas y reclamaciones que por todos se les hagan, haciéndoles comprender el espíritu de las Leyes y Reglamentos.

Artículo 40. La Inspección del Trabajo ejercerá libremente sus funciones de vigilancia del cumplimiento de las leyes sociales en todos los centros de trabajo (incluyendo las minas y las vías férreas) sujetos al cumplimiento de dichas leyes, sea cual fuere la condición del patrono.

La facultad inspectora alcanzará también a aquellos Centros de trabajo industrial o mercantil cuyo patrono sea el Estado, la Provincia o el Municipio.

Artículo 41. Las visitas del Inspector a los Centros de trabajo podrán realizarse a todas las horas del día y de la noche.

Artículo 42. Los Inspectores tendrán la facultad de examinar los locales, el material, los registros del personal, en lo relativo a edades y sexos; los Reglamentos, las certificaciones referentes a la edad, instrucción, sanidad y aptitud física de los niños y demás documentos que las leyes del trabajo consideren como obligatorias.

Existirá en todos los establecimientos sujetos a inspección un libro de visitas, habilitado por el Inspector, donde se consignará lo que se determina en este Reglamento.

Los Inspectores podrán también, con la debida reserva, interrogar al personal en cuanto se relacione con el cumplimiento de las leyes de trabajo.

Artículo 43. Estando obligados al cumplimiento de las disposiciones vigentes de carácter social los Centros de trabajo en que sea patrono el Estado, la Provincia o el Municipio, los funcionarios de la Inspección del Trabajo tendrán libre acceso a los locales en que se preste tal trabajo y facultad para realizar en ellos la función inspectora en la forma reglamentaria.

Los funcionarios de la Inspección tendrán igualmente derecho a visitar los lugares de trabajo de los Establecimientos benéficos donde el personal asilado realice trabajos para la venta con fines económicos o se halle en situación de aprendizaje.

En las obras o establecimientos del Ejército o de la Marina, los Inspectores sólo tendrán libre entrada en los locales donde trabajen mujeres o niños.

Artículo 44. Para ejercer su misión en lo referente a espectáculos públicos, el Inspector podrá entrar en todos los locales y dependencias, pero sin ocupar ni exigir que que se ponga a su disposición ninguna localidad destinada al público.

Artículo 45. En caso de negarse la entrada a los Inspectores en algún Centro de trabajo después de haber acreditado su calidad mediante exhibición del documento que lo acredite y advertido el Jefe del establecimiento o persona que le reciba si aquél no se presenta en la responsabilidad en que incurre, el Inspector redactará acta de lo ocurrido y acudirá de oficio a la Autoridad local gubernativa en demanda del auxilio necesario, el cual le será prestado sin pérdida de tiempo.

El Inspector dará inmediata cuenta a su Jefe y éste a la Superioridad.

Si de los hechos resultare falta o delito en que deban entender los Tribunales de Justicia, el Inspector enviará al Delegado y éste lo transmitirá a la Autoridad judicial com-

petente, a los efectos que procedan, un ejemplar del acta autorizada por testigos hábiles.

Del resultado del procedimiento se dará conocimiento por la Autoridad judicial al Delegado, que a su vez dará cuenta al Servicio Central.

Artículo 46. Todas las Autoridades civiles o militares o de cualquier otro orden y los Jefes de oficinas generales, provinciales o municipales están obligados a suministrar a la Inspección cuantos datos y antecedentes reclamen y puedan contribuir al mejor desempeño de su cometido, prestando a sus individuos el apoyo, concurso, auxilio y protección que necesiten en el ejercicio de su cargo.

Si estos auxilios no fuesen todo lo eficaces que demanda el servicio público, los Inspectores lo pondrán en conocimiento del Delegado, y éste en el del Servicio Central, a los efectos oportunos.

Artículo 47. Los Gobernadores y Alcaldes facilitarán al personal de la Inspección cuantos antecedentes oficiales existan en las dependencias de su cargo y que se soliciten por los Inspectores para el cumplimiento de su misión.

Les facilitarán asimismo Agente de su autoridad que les acompañe en las visitas de inspección cuando los Inspectores lo estimen necesario.

Artículo 48. Los Jurados mixtos del Trabajo y las Delegaciones del Consejo de Trabajo pondrán a disposición de los Inspectores todos los datos que tengan relativos a las industrias de la localidad, personal obrero y los demás que posean relacionados con la misión de aquéllos.

Artículo 49. Los patronos, en orden al servicio de inspección, están obligados:

1.º A comunicar al Inspector del trabajo correspondiente las condiciones de instalación de sus establecimientos antes de que éstos empiecen a funcionar, para que la Inspección pueda apreciar las condiciones de higiene y seguridad de los mismos y tomar las medidas necesarias para garantía de los trabajadores.

2.º A proveerse de un libro de visitas que deberá ser utilizado por el Inspector y en el que la Inspección pueda hacer constar las diligencias referentes a dichas visitas.

Este libro estará siempre a disposición de los Inspectores y será considerado como documento perteneciente a la Inspección.

3.º A facilitar a los Inspectores la entrada a todos los locales en que se realice el trabajo.

4.º A poner de manifiesto ante los Inspectores, cuando éstos lo reclamen, los contratos de trabajo, los Reglamentos de orden interior, los horarios, los certificados referentes a la situación civil, Sanidad e instrucción de los menores; los libros y registros no declarados secretos por el Código de Comercio y cuantos datos y noticias necesite para el recto ejercicio de su función inspectora.

5.º A no impedir que el Inspector recabe reservadamente de los obreros cuantas noticias puedan interesarle sobre las condiciones del trabajo.

6.º A dar cuenta al Inspector de los accidentes de carácter grave que ocurran en el establecimiento.

Artículo 50. Los Inspectores deberán guardar secreto respecto a los procedimientos industriales de que lleguen a tener conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones.

La infracción de este deber hará incurrir a los Inspectores en las sanciones contenidas en los artículos correspondientes del Código penal, sin perjuicio de la responsabilidad que pudieran contraer por usurpación de patentes con arreglo a la ley de Propiedad industrial.

Artículo 51. En cuanto se relacione con las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, el Inspector se

limit
neces
hace
bre
para
llos
A
lié
A
pre
tes
pro
A
ción
1
tor
jo,
cilio
2
Ins
dite
prá
3
las
4
cum
5
pre
6
ner
pec
A
se
pes
las
Tra
cua
A
san
dos
fra
vol
El
el
qu
mu
añ
lla
cio
de
Ce
se
Ce
Ins
so
Co
ne

limitará a señalar al patrono las faltas que observe y la necesidad de subsanarlas con arreglo a lo legislado, sin hacer indicaciones respecto al modo de remediarlas ni sobre el detalle de las disposiciones que habrá de adoptar para el cumplimiento de la ley en lo concerniente a aquellos extremos.

Al patrono incumbe tomar por sí esas disposiciones, valiéndose de su personal técnico.

SECCION CUARTA

Sanciones.

Artículo 52. Las sanciones por incumplimiento de los preceptos de la Legislación del Trabajo serán independientes de la responsabilidad civil o criminal que en cada caso proceda con arreglo a las Leyes.

Artículo 53. Se considerarán como casos de obstrucción al servicio de Inspección del Trabajo:

1.º La negativa a la entrada y permanencia del Inspector durante la visita al establecimiento y centro del trabajo, aunque el local donde se trabaje forme parte del domicilio del patrono o se trate de un taller de familia.

2.º La resistencia, aunque sea pasiva, a presentar al Inspector los registros, libros y documentos que acrediten el cumplimiento de la Ley o sean necesarios para la práctica del servicio de Inspección.

3.º La ocultación del personal obrero que no tenga las condiciones legales para el trabajo.

4.º Las declaraciones falsas que impidan al Inspector cumplir sus funciones de tal.

5.º La carencia del libro de visita o la negativa a su presentación en el momento de ella.

6.º Cualesquiera otros actos u omisiones que, en general, impidan, perturben o dilaten el servicio de la Inspección, apreciados por los encargados de realizarla.

Artículo 54. La obstrucción al Servicio de Inspección se castigará con multa que no podrá exceder de 1.000 pesetas, impuesta y aplicada en sus distintos grados, según las circunstancias del hecho, por el Delegado provincial del Trabajo, sin perjuicio de la acción penal que corresponda cuando la obstrucción constituya falta o delito.

Artículo 55. El concepto de infracción, así como las sanciones que por ella han de imponerse, serán los definidos en las disposiciones legales vigentes.

Artículo 56. No será aplicable la sanción cuando la infracción tuviere por causa un error de hecho ajeno a la voluntad del patrono o de su representante, si lo tuviere. El error deberá ser demostrado con pruebas bastantes por el patrono ante el Inspector que entendiese en el asunto.

Artículo 57. Se considerará reincidente a todo patrono que, notificado de habersele impuesto en resolución firme multa por infracción, incurra en falta análoga dentro del año, contado a partir del día siguiente a la fecha de aquella notificación.

Artículo 58. Las reincidencias reiteradas en las infracciones de las leyes sociales o en la obstrucción al Servicio de Inspección del Trabajo, podrán motivar el cierre del Centro de trabajo o la suspensión de la industria en que se produzca la infracción.

El expediente para cerrar temporal o definitivamente un Centro de trabajo será instruido por el Servicio Central de Inspección, y en él se dará audiencia al interesado. La resolución será dictada por el Ministro, previo informe del Consejo de Trabajo.

Artículo 59. Los dueños de las industrias, explotaciones o Centros de trabajo, así como las Sociedades y enti-

dades de toda índole, serán civilmente responsables de las sanciones impuestas a sus Directores o Gerentes.

Artículo 60. Para todos los efectos jurídicos, el domicilio legal será el del lugar en que se hubiese cometido la infracción.

Artículo 61. Las multas por infracción de las leyes sociales se ingresarán en el Instituto Nacional de Previsión para fines benéficos en favor de la clase obrera.

Artículo 62. La acción para perseguir las infracciones de las leyes sociales prescribirá a los tres años.

SECCION QUINTA

Procedimiento

Artículo 63. El procedimiento para imposición de sanciones se ajustará a las siguientes normas:

1.ª El Inspector del Trabajo que observare alguna infracción de las leyes sociales, extenderá la correspondiente acta y hará la consignación en el libro de visitas. El acta se considerará como documento con fuerza obligatoria, salvo prueba en contrario, y el mismo valor tendrán las actas de los Inspectores Auxiliares cuando lleven el «conforme» de los provinciales de que dependan. En el acta se hará constar el nombre y domicilio del patrono, el lugar y el carácter de la infracción y los artículos de las leyes infringidas, no siendo preciso que conste en ella la firma del patrono, ni que se extienda dentro del Centro visitado.

2.ª El acta de infracción se enviará al Delegado provincial del Trabajo correspondiente, en unión de un oficio que contenga una exposición sucinta del hecho, la indicación del artículo o artículos infringidos por el patrono y la penalidad correspondiente. Al señalar esta penalidad se tendrán en cuenta las circunstancias del caso, la condición social del patrono, la potencia de la industria y cuanto pueda servir para la más justa determinación de la multa. El Inspector denunciante enviará al patrono una copia del acta y del oficio remitido al Delegado provincial del Trabajo, para que aquél pueda enviar a éste su escrito de descargos en plazo de cinco días. Si en el acto de la visita no se hiciese constar ante el Inspector que el patrono tiene su residencia fuera del Municipio en que cometió la infracción, aquél no estará obligado a remitirle la copia del acta a su residencia, sino al lugar de la explotación.

3.ª Recibida el acta y oficio que le acompañe por el Delegado del Trabajo, éste ordenará la formación de un expediente, al que se unirá el escrito de descargos, si lo remitiere el patrono en el plazo legal, y estos documentos servirán de base a la resolución que será dictada por el Delegado provincial del Trabajo en el plazo de diez días hábiles, contados desde el quinto día del recibo de la comunicación del Inspector denunciante, esta resolución será notificada al interesado por correo en pliego certificado y, si se estimase preciso, por conducto de la Alcaldía correspondiente.

4.º Si la multa impuesta fuese inferior a 500 pesetas, el patrono multado podrá entablar recurso de reposición ante el propio Delegado provincial, en el plazo de diez días hábiles, contados desde el de la notificación de la multa. En el escrito de recurso, el patrono multado hará las alegaciones que estime oportunas, proponiendo los medios generales de prueba, y si solicitase la práctica de una prueba testifical, acompañará la lista de los testigos y el interrogatorio por el que habrán de ser preguntados. Los documentos de que pretenda valerse el recurrente deberán ser presentados con el escrito de recurso. El Delegado provincial de Trabajo se encargará de pedir la prác-

tica de la prueba testifical a los Juzgados municipales de los lugares en que residan los testigos que deben declarar. Una vez completas las actuaciones, el Delegado provincial de Trabajo, en el plazo de diez días hábiles, dictará la resolución definitiva, ya absolviendo al patrono, ya confirmando la multa impuesta o rebajándola en los términos que estime procedentes.

5.^a Si la multa fuese superior a 500 pesetas, el patrono multado podrá apelar de ella en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación, ante el Ministerio de Trabajo, quien lo resolverá previo informe del Consejo de Trabajo.

Este recurso se presentará ante el Delegado provincial del Trabajo que hubiese impuesto la sanción recurrida y en un escrito de alegaciones en el que se propondrá la prueba pertinente en la misma forma señalada en el número anterior de este artículo. El mismo Delegado ordenará la práctica de las pruebas propuestas y, una vez realizadas, enviará todo el expediente, con un breve informe al Servicio Central para que éste formule la oportuna propuesta de resolución que corresponderá al Ministro, previo informe del Consejo de Trabajo; sin que, contra las que se dicten con tales requisitos, quepa ulterior recurso.

6.^a No se admitirá recurso alguno contra ninguna sanción, cualquiera que sea su cuantía, sin que el recurrente justifique documentalmente haber depositado el importe de la multa, más el 20 por 100, en la Caja Central de Depósitos, en la Sucursal de la provincia o, en su defecto, en poder de los representantes de la Compañía Arrendataria de Tabacos, conforme al artículo 5.º del Real decreto de 24 de Diciembre de 1906. Si no se acreditase la expresa consignación cinco días después del término legal para entablar el recurso, se entenderá éste caducado.

7.^a Las resoluciones que recaigan en estos expedientes se comunicarán a los Delegados provinciales de Trabajo que los hubieren instruido y éstos las notificarán a los recurrentes por medio de las Alcaldías correspondientes.

8.^a Una vez firme la sanción, bien por no haberse recurrido contra ella en el plazo legal, bien por haber sido desestimado el recurso, se enviará el importe de las multas al Instituto Nacional de Previsión. Este envío lo hará directamente el multado en el plazo de cinco días desde que le fué notificada la multa si no recurre contra ella, y en el mismo plazo lo efectuará la Caja de Depósitos, sus Sucursales provinciales o el representante de la Compañía Arrendataria de Tabacos, previa orden del Delegado provincial del Trabajo correspondiente si el recurso hubiera sido desestimado.

De la cuantía de la multa se descontará el importe del giro. Los remitentes comunicarán el envío de la cantidad al Instituto Nacional de Previsión, para que éste pueda remitir el oportuno recibo y comunicarlo a la Delegación provincial del Trabajo que impuso la sanción. Si un multado que no hubiese recurrido enviase el importe de las multas al Instituto Nacional de Previsión dentro plazo expresado en el párrafo anterior, no se le podrá exigir cantidad alguna en concepto de costas; pero si no efectuase el indicado envío, el Delegado pasará la oportuna comunicación al Juzgado correspondiente para que proceda por vía de apremio. Si la multa fuese revocada, las costas que se hubieran producido en el Juzgado serán de oficio y el Delegado provincial del Trabajo extenderá la orden de devolución del depósito.

Artículo 64. El procedimiento indicado en el artículo anterior para la tramitación de las sanciones propuestas por los Inspectores provinciales de Trabajo, se aplicará también a la de aquéllas que se propongan por los Jura-

dos mixtos de Trabajo o por las Delegaciones del Consejo de Trabajo contra los infractores de leyes sociales, y para iniciar el procedimiento será preciso que las actas, bien sean de infracción o de obstrucción, hayan sido previamente aprobadas por el Jurado mixto o Sección autónoma del mismo o por el Pleno de la Delegación.

CAPITULO III

De la provisión de las plazas de Delegados del Trabajo, Auxiliares de Delegaciones, Inspectores provinciales del Trabajo e Inspectores auxiliares.

SECCIÓN PRIMERA

De los concursos-oposiciones para las plazas de Delegados del Trabajo.

Artículo 65. Las plazas de Delegados del Trabajo se proveerán, por primera vez, mediante concurso-oposición.

Cubiertas las plantillas, las vacantes de Delegados de primera y segunda categoría se proveerán por concurso, en el que sólo podrán tomar parte los Delegados de las categorías inferiores y los Inspectores provinciales del Trabajo. En las de Delegados de tercera clase se establecerán dos turnos: uno, de concurso, en el que sólo podrán tomar parte los Auxiliares de Delegaciones, y otro, de concurso-oposición.

No podrá, sin embargo, sacarse a concurso ninguna de estas plazas cuando haya solicitado ocuparla algún Delegado de la categoría de la vacante que estuviese en situación legal de excedencia.

Artículo 66. Los funcionarios que en la fecha de la promulgación de la Ley de 13 de Mayo de 1932 sobre organización de Delegaciones del Trabajo, llevaren más de seis meses desempeñando los cargos de Delegados regionales del Trabajo o de Inspectores regionales y provinciales del Trabajo, y se presentaran al primer concurso-oposición que se celebre para la provisión de plazas de Delegados del Trabajo tendrán derecho preferente, en igualdad de condiciones, con los demás concursantes.

Tendrán el mismo derecho en todos los concursos-oposiciones, sobre los demás concursantes no especificados en el párrafo anterior, en primer término, los funcionarios que en los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y durante dos años, al menos, hayan tenido a su cargo una Sección o Negociado o hayan desempeñado análoga función que lleve aneja la facultad de formular propuestas de resoluciones, y en segundo término, los Auxiliares de las Delegaciones.

Artículo 67. Los concursos-oposiciones que se convoquen para la provisión de las plazas de Delegados de Trabajo tendrán carácter público y se celebrarán ante un Tribunal constituido en la forma siguiente: Presidente, el Presidente del Consejo de Trabajo; Vocales: el Secretario general y el Asesor general del Consejo de Trabajo; un Magistrado de la Sala social del Tribunal Supremo, designado por la propia Sala, y un Jefe de Servicio del Ministerio de Trabajo, que actuará como Secretario del Tribunal, designado por el Ministro. Como Vocales suplentes se designarán un Magistrado de la mencionada Sala del Tribunal Supremo, propuesto por la misma Sala; el Asesor técnico del Consejo de Trabajo, y un Jefe de Servicio del Mencionado Ministerio.

Artículo 68. El concurso-oposición para proveer las plazas de Delegados provinciales de Trabajo, ya se trate del primer concurso-oposición a las plazas de Delegados en sus diversas categorías, o de los que se celebren pos-

teriormente para las plazas de Delegados de tercera categoría, constará de los siguientes ejercicios:

1.º Redactar un dictamen sobre unas bases de trabajo aprobadas por un Jurado mixto o sobre los Estatutos o los Reglamentos de una Asociación profesional, o los de una Cooperativa, y redactar un proyecto de pacto colectivo entre una Asociación patronal y una obrera de la industria que determine el Tribunal. Para este ejercicio se concederán cuatro horas y los opositores podrán disponer de texto legales.

2.º En un plazo de tres horas, y disponiendo también los concursantes de los textos legales, dictar un fallo en un expediente iniciado con un acta de infracción o de obstrucción levantada por un Inspector del Trabajo, o en un expediente de sanciones por infracción de bases del trabajo incoado por un Jurado mixto, y aplicar la legislación del Trabajo a un caso que proponga el Tribunal.

Estos ejercicios se practicarán ante una representación del Tribunal, bien conjuntamente por todos los opositores, bien en series de ellos, designadas por la suerte, si el número no permitiera su actuación simultánea.

Los ejercicios escritos, una vez calificados por el Tribunal, estarán a disposición de los opositores durante cuarenta y ocho horas, previo anuncio que hará la Secretaría del Tribunal.

3.º Contestar oralmente, en sesión pública y por término máximo de una hora, dos temas designados por la suerte, uno de Política social y otro de Derecho obrero, de entre los que contengan los cuestionarios que el Tribunal hará público quince días naturales antes de la fecha de comenzar dicho ejercicio.

Cada ejercicio será objeto de calificación especial, que se hará público por el Tribunal mediante lista de los opositores admitidos a practicar el siguiente ejercicio, tratándose de los dos primeros, y mediante la publicación de los definitivamente aprobados, después de practicado el tercero, formulándose la oportuna propuesta en lista al Ministro por orden de méritos de los aprobados, teniendo en cuenta las preferencias legales, sin que pueda figurar en ningún caso número mayor de propuestos que de vacantes que se hayan de proveer.

Artículo 69. En los concursos que se celebren entre Auxiliares de las Delegaciones para cubrir las plazas de Delegados de tercera clase que correspondan a ese turno de provisión, se practicarán los dos primeros ejercicios señalados en el artículo 74 de este Reglamento y ante un Tribunal compuesto del Presidente del Consejo de Trabajo, del Secretario general y del Asesor general de dicha Corporación o de quienes los reemplacen reglamentariamente; un Magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo, designado por la misma Sala y un Jefe de Servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión, que desempeñará las funciones de Secretario, designado por el Ministro; como suplentes figurarán un Magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo, propuesto por la misma; un Oficial primero de la Asesoría del Consejo, propuesto por el Presidente, y un Jefe de Servicio del Ministerio, designado por el Ministro.

SECCIÓN SEGUNDA

De los concursos-oposiciones para las plazas de Auxiliares de las Delegaciones.

Artículo 70. Las plazas de Auxiliares de las Delegaciones se cubrirán siempre mediante concurso-oposición, con arreglo a las normas que se señalan en los artículos siguientes:

Artículo 71. En el primer concurso-oposición que se celebre para la provisión de dichas plazas, los que al tiempo de promulgarse la Ley de 13 de Mayo de 1932 llevasen más de seis meses desempeñando los cargos de Auxiliares de las Delegaciones regionales del Trabajo o de Auxiliares y Ayudantes de la Inspección del Trabajo, tendrán derecho preferente, en igualdad de condiciones con otros concursantes, a ocupar las plazas de Auxiliares de las Delegaciones.

Tendrán el mismo derecho en dicho concurso-oposición y en los posteriores que se celebren sobre los demás concursantes no especificados en el párrafo anterior, los funcionarios que hayan prestado durante dos años servicios administrativos en cualquiera dependencia del Ministerio de Trabajo y los graduados de las Escuelas Sociales.

Artículo 72. Los concursos-oposiciones que se convoquen para la provisión de las plazas de Auxiliares de las Delegaciones tendrán carácter público y se verificarán ante un Tribunal, que estará constituido por el Vicepresidente segundo del Consejo de Trabajo, Presidente; un Oficial de la Secretaría general del Consejo de Trabajo, un Jefe de Sección de la Asesoría del Consejo de Trabajo, designados por el presidente del mismo; un Profesor de la Facultad de Derecho, designado por el Claustro, y un Jefe de Servicio del Ministerio de Trabajo, designado por el Ministro, Vocales. El Jefe del Servicio actuará de Secretario.

Serán suplentes: Un Profesor de la facultad de Derecho, designado por el Claustro; un Oficial primero del Consejo de Trabajo, designado por el Presidente de dicha Corporación, y un jefe del Servicio del Ministerio.

Artículo 73. Para proveer las plazas de Auxiliares de las Delegaciones de Trabajo los aspirantes habrán de practicar los tres ejercicios siguientes:

1.º Un ejercicio de carácter práctico, que consistirá en extractar un expediente y redactar los resultados de un fallo en vista de los hechos que determine el Tribunal. Los aspirantes dispondrán de tres horas para este ejercicio.

2.º Contestar dos temas generales de un Cuestionario de Derecho Social obrero, dado a conocer con quince días naturales de anticipación a la fecha de comienzo de las oposiciones. Los aspirantes dispondrán de cuarenta y cinco minutos como máximo para contestar ambos temas.

3.º Un ejercicio en la máquina de escribir, que durará por lo menos veinte minutos, y en el que se apreciarán la velocidad, la claridad de la escritura y la carencia de equivocaciones.

El Tribunal podrá también encargar a los aspirantes un ejercicio de clasificación y archivo de documentos.

La calificación se hará en la misma forma que la de los ejercicios para plazas de Delegados.

Los dos primeros ejercicios serán eliminatorios, y una vez hecho el tercero el Tribunal elevará la propuesta al Ministro de Trabajo, teniendo en cuenta no sólo la aprobación de los ejercicios, sino además el derecho de preferencia señalado en el artículo 71 de este Reglamento.

Terminado el primer concurso-oposición para la provisión de los cargos de Auxiliares de las Delegaciones, el Ministerio de Trabajo y Previsión organizará, con personal competente, un cursillo de ampliación de conocimientos para los nuevos Auxiliares.

SECCIÓN TERCERA

De los concursos-oposiciones para proveer las plazas de Inspectores provinciales de Trabajo.

Artículo 74. Las plazas de Inspectores provinciales de

Trabajo se proveerán la primera vez mediante concurso-oposición público entre los aspirantes que reúnan las condiciones señaladas en el artículo 26 de este Reglamento.

Artículo 75. Una vez cubiertas las plantillas de los Inspectores provinciales, se proveerán las vacantes que ocurran en dos turnos, siempre que no correspondan las vacantes a los funcionarios que, después de haberlas desempeñado, hubiesen adquirido el derecho de excedencia; el primer turno será de concurso y en él sólo podrán tomar parte los Inspectores auxiliares; el segundo será de concurso-oposición. De cada dos vacantes que se hayan de proveer, la primera se cubrirá en turno de concurso y la segunda en el de concurso oposición.

Artículo 76. Los funcionarios que en la fecha de la promulgación de la Ley de 13 de Mayo de 1932 llevasen más de seis meses desempeñando los cargos de Delegados regionales de Trabajo, de Inspectores regionales o de Inspectores provinciales de Trabajo, y se presentaren al primer concurso-oposición que se celebre para la provisión de plazas de Inspectores provinciales de Trabajo, tendrán derecho preferente, en igualdad de condiciones, sobre los demás concursantes.

Tendrán el mismo derecho en todos los concursos-oposiciones para la provisión de las mencionadas plazas sobre los demás concursantes no especificados en el párrafo anterior los funcionarios que en los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y durante dos años, al menos, hayan tenido a su cargo una Sección o Negociado, o desempeñado una función consistente en formular propuestas de resolución a los Inspectores auxiliares.

Artículo 77. Los concursos-oposiciones que se convoquen para la provisión de plazas de Inspectores provinciales de Trabajo se celebrarán ante un Tribunal compuesto del Vicepresidente primero del Consejo de Trabajo, como Presidente; del Vicesecretario del Consejo, del Asesor técnico de dicho Organismo, de un Inspector de Trabajo que sea ingeniero y de un Jefe de Servicio del Ministerio, que será el Secretario del Tribunal, designado por el Ministro. Serán suplentes un Inspector de Trabajo, un funcionario del Servicio Central de Inspección, designado por el Ministro, y un Oficial de la Asesoría del Consejo de Trabajo relacionado con el citado Servicio de Inspección, designado por el Presidente.

Artículo 78. Los ejercicios para la provisión de plazas de Inspectores serán los siguientes.

Primero. Contestar por escrito, en el plazo de tres horas, a dos consultas que se le formulen en relación con la aplicación de la legislación del trabajo. Para esta prueba podrán los concursantes consultar los correspondientes textos legales.

Segundo. Contestar por escrito, en el plazo de cuatro horas, a dos cuestiones que formulará el Tribunal relativas a la aplicación de la legislación del trabajo en las siguientes materias:

- a) Seguridad del funcionamiento de máquinas y seguridad en las construcciones.
- b) Industrias y trabajos insalubres o peligrosos; y
- c) Higiene y salubridad de los Centros de trabajo.

Tercero. Contestar oralmente a dos preguntas de un Cuestionario de Política Social y Legislación de Trabajo, que se hará público quince días naturales antes de aquel en que comience dicho ejercicio.

Cuarto. Formación de un expediente de infracción o de obstrucción y tramitación del mismo hasta la propuesta de la sanción correspondiente.

El Tribunal podrá acordar, además, que los aspirantes

realicen algún otro ejercicio práctico, como, por ejemplo, el de visitar un Centro de trabajo u otro análogo.

Artículo 79. Cada ejercicio será objeto de calificación particular, que se hará pública por el Tribunal mediante lista de los opositores admitidos a practicar el siguiente, tratándose de los dos primeros, y mediante la publicación de la lista de los aprobados, después de que se practique el tercero.

Terminados los ejercicios, el Tribunal hará la propuesta al Ministro de Trabajo, teniendo en cuenta, no sólo la aprobación de aquéllos, si no, además, el derecho de preferencia señalado en los artículos anteriores.

Artículo 80. En los concursos que se celebren entre Inspectores Auxiliares para cubrir las plazas de Inspectores provinciales que correspondan a ese turno de provisión, se practicarán los dos primeros ejercicios señalados en el artículo 78.

SECCIÓN CUARTA

De la designación de los Inspectores Auxiliares.

Artículo 81. Cuando se trate de la provisión de las plazas de Inspectores Auxiliares se distinguirá el caso de que estas plazas se refieran a los Inspectores Auxiliares encargados especialmente de velar por el trabajo en las minas (sin perjuicio de las facultades que corresponden a los Ingenieros de Minas), del caso a que se refieren a los demás Inspectores Auxiliares.

Artículo 82. El Ministro de Trabajo y Previsión determinará en cada caso el número de plazas que de las dotadas en los Presupuestos del Estado y que se hallen vacantes, habrán de reservarse para los Inspectores Auxiliares que hayan de ser destinados a la Inspección en las minas, según las necesidades de este servicio y el de Inspección en las demás industrias.

Las de los primeros se proveerán mediante concurso en el que solamente podrán tomar parte quienes acrediten haber trabajado durante cinco años en explotaciones mineras y sean propuestos por Asociaciones profesionales de este grupo industrial.

Los concursantes habrán de demostrar conocimientos elementales de la legislación sobre policía minera y de los Reglamentos de Inspección del Trabajo.

Artículo 83. Las demás plazas de Inspectores Auxiliares se cubrirán siempre mediante concurso-oposición con arreglo a las normas que se señalan en los artículos siguientes:

Artículo 84. En el primer concurso-oposición que se celebre para la provisión de dichas plazas, los que al dictarse la Ley de 13 de Mayo de 1932 sobre Delegaciones del Trabajo llevaren más de seis meses desempeñando los cargos de Auxiliares de las Delegaciones de Trabajo o de Auxiliares o Ayudantes de la Inspección del Trabajo, así como los graduados de las Escuelas sociales, tendrán derecho preferente, en igualdad de condiciones con otros concursantes, a ocupar las plazas de Inspectores Auxiliares.

Tendrán el mismo derecho, en igualdad de condiciones, en todos los concursos-oposiciones, sobre los demás concursantes no especificados en el párrafo anterior, los aspirantes que demuestren conocimiento y práctica de oficios industriales por haber trabajado durante más de cinco años en algún taller, fábrica, oficina o comercio, y los que demuestren práctica de inspección de trabajo por haber formado parte de alguno de los organismos de Inspección dependientes del Ministerio de Trabajo o de los encargados de inspeccionar las bases de trabajo de algunas de las ramas industrial o comercial.

Artículo 85. Los concursos-oposiciones que se convoquen para la provisión de las plazas de Inspectores Auxiliares, se verificarán ante el mismo Tribunal formado para los concursos de los Inspectores provinciales de Trabajo.

Artículo 86. Los ejercicios para la provisión de plazas de Inspectores Auxiliares serán los siguientes:

Primero. Contestar por escrito, en el plazo máximo de cuatro horas, a dos cuestiones relativas a la aplicación a casos concretos de las leyes de jornadas de trabajo, descanso semanal, mujeres y niños, mecanismos preventivos de accidentes del trabajo y organización y funcionamiento de las Inspección del Trabajo.

Segundo. Formación de un expediente de infracción o de obstrucción con la tramitación del mismo hasta la propuesta de sanción.

Artículo 87. El Tribunal podrá acordar, además, que los aspirantes verifiquen algún otro ejercicio práctico demostrativo del modo de ejercer la función inspectora.

Artículo 88. Los ejercicios de que tratan los artículos anteriores serán eliminatorios. El Tribunal publicará la lista de aprobados en cada uno de ellos, y después de realizado el último, elevará la propuesta al Ministro de Trabajo, teniendo en cuenta, no sólo la aprobación de los ejercicios, sino además el derecho de la preferencia señalado en este Reglamento.

Artículo 89. Terminado el primer concurso-oposición para la provisión de las plazas de Inspectores provinciales y de Inspectores auxiliares, el Ministro de Trabajo y Previsión organizará, con personal competente, un cursillo de ampliación de conocimientos para los que hubieren obtenido plaza.

SECCIÓN QUINTA

Plazos y normas de las convocatorias de los concursos-oposiciones

Artículo 90. Todas las oposiciones y concursos para Delegados, Auxiliares, Inspectores de Trabajo e Inspectores auxiliares se anunciarán en la «Gaceta», por lo menos con tres meses de antelación al día en que hayan de comenzar los ejercicios.

Los aspirantes presentarán en el Ministerio de Trabajo sus solicitudes y documentación correspondientes, y además harán efectivo, como derecho de examen y en el mismo acto de la presentación de documentos, el pago de 50 pesetas, los que aspiren a plazas de Delegados o Inspectores provinciales y de 30 pesetas los que aspiren a plazas de Auxiliares de Delegaciones e Inspecciones auxiliares. Esta cantidad se destinará al pago de las dietas de los jueces de los Tribunales, del material de las oposiciones y de los emolumentos que se acuerde dar al personal administrativo y subalterno que trabaje a las órdenes de los Tribunales. El Presidente y el Secretario del Consejo de Trabajo determinarán la distribución de esos fondos con arreglo a las disposiciones vigentes en la materia.

Artículo 91. El plazo para la presentación de solicitudes se determinará en cada convocatoria y nunca podrá ser menor de un mes.

Artículo 92. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en la «Gaceta» la lista de aspirantes admitidos, con indicación de los defectos subsanables en la documentación. En los diez días siguientes a esta publicación podrán los interesados subsanar dichos defectos o reclamar contra su exclusión.

Artículo 93. Formada por el Ministerio la lista definitiva de opositores admitidos, se remitirá la documentación

al Presidente del Tribunal respectivo, quien procederá a su constitución y anunciará en la «Gaceta» el día que hayan de comenzar los ejercicios con quince días, por lo menos, de antelación.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 94. En los «Boletines Oficiales» de las provincias se publicarán los nombramientos y domicilios de los Delegados de Trabajo y de los demás funcionarios de la Inspección afectos a las mismas, así como el cese temporal o definitivo en sus destinos.

Artículo 95. El Ministerio de Trabajo y Previsión proveerá a cada uno de los funcionarios de la Inspección de un documento o cartera de identidad que acredite que están en el ejercicio de su cargo, indicando la demarcación que les corresponde. Este documento se recogerá y anulará al cesar en el cargo.

El documento de identidad es necesario para justificar la cualidad del Inspector y dar legalidad a sus actos.

Artículo 96. Los Delegados provinciales de Trabajo y los Inspectores provinciales de Trabajo tendrán franquicia postal con el Ministerio de Trabajo y Previsión, con los Gobernadores civiles y demás autoridades, así gubernativas como judiciales, de sus demarcaciones y con los Jurados mixtos, Agrupaciones y Sindicatos obreros o patronales legalmente establecidos en ellas. Los Delegados provinciales de Trabajo y los Inspectores provinciales tendrán también franquicia telegráfica con el Ministerio de Trabajo para asuntos urgentes del Servicio.

Artículo 97. Será aplicable a los Delegados provinciales de Trabajo, a los Auxiliares de las Delegaciones y a los Inspectores provinciales e Inspectores auxiliares el régimen establecido por la Ley para los demás funcionarios de la Administración civil del Estado, referente al derecho de Asociación, posesiones, retenciones, premios, correcciones, licencias, excedencias, separación del servicio, ceses, jubilaciones, pensiones de retiro, viudedad y orfandad. Al afecto de las pensiones anteriormente indicadas, el sueldo regulador será el que efectivamente perciba el funcionario por asignación de entrada de la clase correspondiente, con el aumento correspondiente por razón de quinquenios de servicios.

El Ministro de Trabajo podrá trasladar libremente de residencia a los Delegados provinciales de Trabajo, a los Auxiliares de las Delegaciones de Trabajo, a los Inspectores provinciales de Trabajo y a los Inspectores auxiliares de Trabajo.

Artículo 98. Los funcionarios nombrados conforme a los preceptos de este Reglamento tendrán carácter de interinos y no podrán ser confirmados hasta pasado un año, en el que habrán de demostrar la eficacia de sus servicios en la forma que se determina en los artículos siguientes.

Artículo 99. Los Delegados que sean Jefes de una Delegación remitirán en la primera quincena del undécimo mes de su actuación a la Dirección general de Trabajo una Memoria en la que expondrán con toda amplitud la gestión que hayan realizado durante ese tiempo, y la Dirección después de haber examinado dicho documento y de aportar las informaciones complementarias que estime oportunas, formulará la propuesta de confirmación o cese en su puesto de dichos funcionarios. El Ministro resolverá en definitiva sobre tales propuestas, previo informe del Consejo de Trabajo.

Artículo 100. Los Delegados que no sean Jefes de De-

legación y los Inspectores provinciales de Trabajo remitirán asimismo a la Dirección general de Trabajo, en la primera quincena del undécimo mes de su actuación, una Memoria en la que expondrán la labor que hayan realizado en dicho tiempo. La Memoria será remitida, por conducto del Jefe de su Delegación y con el informe de éste, a la Dirección general de Trabajo, la que, después de haber examinado dichos documentos y de realizar las informaciones complementarias que estime pertinentes, formulará la propuesta de confirmación o cese de dichos funcionarios, sobre la que se resolverá también por el Ministro previo informe del Consejo de Trabajo.

Artículo 101. Los Jefes de las Delegaciones de Trabajo remitirán a la Dirección general de Trabajo propuesta razonada de confirmación o cese de los Auxiliares de Delegación y de los Inspectores auxiliares de Trabajo que hayan desempeñado sus cargos, y la Dirección general y el Consejo de Trabajo, después de realizar las informaciones complementarias que estimen pertinentes, informarán al Ministro para la resolución definitiva de tales preceptos.

Artículo 102. En el caso de que un Jefe de una Delegación no sea confirmado en su puesto, el Ministro de Trabajo designará un Delegado que, después de inspeccionar aquella Delegación, remitirá a la Dirección general, con su informe, las Memorias que formulen los demás Delegados de dicha Delegación, si hubiese más de uno, y los Inspectores provinciales de Trabajo, y harán las propuestas de confirmación o cese de los Auxiliares de la Delegación e Inspectores auxiliares aún no confirmados en sus cargos; a las propuestas así formuladas se dará la tramitación que se indica en los artículos anteriores.

Artículo 103. Los aspirantes a plazas de Delegados auxiliares de las Delegaciones, Inspectores provinciales e Inspectores auxiliares de Trabajo que acrediten haber desempeñado plazas análogas durante más de tres años, sin nota alguna desfavorable en su expediente, y que obtengan plaza en el concurso-oposición que se celebre para la provisión de dichos cargos, no necesitarán el año de prueba antes citado, quedando confirmados en los puestos que hayan obtenido por el solo hecho de ser designados para ello.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El Ministro de Trabajo podrá efectuar, con carácter interino, las designaciones de personal de todas las categorías que conceptúe precisas para la buena ejecución de los servicios a partir de 1.º de Julio próximo hasta la provisión en propiedad de los cargos conforme a las disposiciones reglamentarias. Este personal será retribuido con cargo a las consignaciones que se citan en el presupuesto para el personal propietario.

Madrid, 23 de Junio de 1932.—Aprobado por S. E.—Francisco L. Caballero.

Intervención de Hacienda de Santander

Relación, por los Ayuntamientos de Meruelo y Miengo, de los señores que, encontrándose en descubierto por el concepto de «Roturaciones arbitrarias», deberán verificar los ingresos, por las cantidades que se mencionan, en un plazo de quince días, a contar de la publicación de este anuncio, o presentarán, caso de haberlo efectuado, la carta de pago que lo acredite:

Expediente número 12 (al contado).—Joaquín Fernández, del Ayuntamiento de Meruelo, 42,65 pesetas.

- 27.—Sebastián Alonso, ídem, 158,95.
 33 (a plazos).—Víctor Sisniega, ídem, 10,72.
 34.—Eugenio Vasco, ídem, 151,84.
 39.—Juan A. Ortiz, ídem, 119,26.
 40.—Pedro Alonso, ídem, 34,23.
 68.—Román Ortiz, ídem, 222,24.
 69.—Dionisio Gama, ídem, 356,31.
 80 A.—Teófilo Ortiz, ídem, 18,36.
 80 B.—El mismo, ídem, 4,38.
 80 C.—El mismo, ídem, 10,23.
 88.—Luis Vierna, ídem, 195,48.
 92 (al contado).—Anastasio Cubillas, ídem, 87,65.
 97 (a plazos).—Visitación Haro, ídem, 76,48.
 105.—Adriano Laborda, ídem, 34,65.
 108 A (al contado).—Juan Forgaros, ídem, 59,46.
 108 B.—El mismo, ídem, 194,53.
 106 A (a plazos).—Mercedes Quintana, ídem, 79,99.
 106 B.—La misma, ídem, 138,71.
 110.—José Crespo, ídem, 42.
 111.—Luis Vierna, ídem, 119,08.
 24 (al contado).—José Farcia, Ayuntamiento de Miengo, 28,79.
 61.—Domingo Arenal, ídem, 45,23.
 62 A.—Eusebio Pozas, ídem, 36,21.
 142.—Consuelo Diestro, ídem, 81,28.
 143.—José García, ídem, 33,85.
 149.—José Mijares, ídem, 71,05.
 155.—Maximino Tresgallo, ídem, 46,55.
 156 A.—Baldomero Corona, ídem, 94,59.
 156 B.—El mismo, ídem, 68,36.
 158 (al contado).—José Haro, ídem, 96,94.
 159 A.—Valentín Guevara, ídem, 41,35.
 159 B.—El mismo, ídem, 54,62.
 160.—José González, ídem, 27,44.
 162.—Apolonia Diestro, ídem, 206,35.
 164.—Baldomera Nocal, ídem, 69,26.
 165.—Aurelia Gutiérrez, ídem, 46,23.
 170 A.—Juan Lazo, ídem, 42,87.
 170 B.—El mismo, 22,41.
 172 A.—José González, ídem, 31,87.
 172 B.—El mismo, 46,55.
 173 (a plazos).—Moisés Tresgallo, ídem, 111,55.
 177 A (al contado).—Bonifacio San Miguel, ídem, 85,01.
 177 B.—El mismo, 50,09.
 177 C.—El mismo, 31,48.
 180 A.—Fermín Sáiz, ídem, 38,18.
 180 B.—El mismo, 41,03.
 187 A.—Emilio García, ídem, 55,65.
 187 B.—El mismo, 65,05.
 195 A.—Esperanza García, ídem, 194,95.
 195 B.—La misma, 16,54.
 199.—Federico Rumoroso, ídem, 139,20.
 201 (a plazos).—Aurelia Haro, ídem, 44,94.
 207 A (al contado).—Manuel Rumoroso, ídem, 119,14.
 207 B.—El mismo, 5,85.
 208 A.—Baldomero Corona, ídem, 139,26.
 208 B.—El mismo, 332,42.
 212.—Rosaura Alonso, ídem, 38,52.
 214 A.—Hipólito Miera, ídem, 47,40.
 214 B.—El mismo, 56,45.
 218 A (a plazos).—Primitivo San Miguel, ídem, 28,85.
 218 B.—El mismo, 40,04.
 219.—Venancio Haro, ídem, 172,54.
 220 A (al contado).—Nicanor Balbontín, ídem, 31,03.
 220 B.—Hermenegildo San Miguel, ídem, 5,03.
 223.—Domingo Tresgallo, ídem, 186,36.
 227 (a plazos).—Federico Izaguirre, ídem, 154,53.

229
229
229
230
231
232
235
235
238
239
240
245
245
245
247
249
249
253
258
259
261
261
264
274
276
277
280
285
286
288
288
292
301
302
San
Hacie
AN
De
local
al se
antes
plazo
na de
El
Cons
suba
blica
unos
D. F
mism
Lo
vecin
Er
trein

- 229 A (al contado).—Nemesio Ruiz, ídem, 81,60.
 229 B.—El mismo, 30,35.
 229 C.—El mismo, 21,97.
 230.—Vicente Balbontín, ídem, 33,96.
 231 (a plazos).—Conrado Sáiz, ídem, 66,52.
 232 (al contado).—Antonio Fernández, ídem, 48,23.
 235.—Emilio Rodríguez, ídem, 75,90.
 235.—Francisco Touces, ídem, 90,46.
 238 (a plazos).—Mariano Alonso, ídem, 46,45.
 239 (al contado).—Senén Tresgallo, ídem, 273,05.
 240.—Ramón Haro, ídem, 93,21.
 245 A.—Quintín Ríos, ídem, 9,27.
 245 B.—El mismo, 13,80.
 245 C.—El mismo, 61,16.
 247.—José Mijares, ídem, 18,39.
 249 A.—Joaquín Hoyo, ídem, 174,50.
 249 B.—El mismo, 35,61.
 253.—Eduardo Corral, ídem, 22,12.
 258.—Joaquín Herrera, ídem, 63,99.
 259.—Ramón Tresgallo, ídem, 269,76.
 261 A.—Segundo García, ídem, 69,45.
 261 B.—El mismo, 39,53.
 264.—Manuel García, ídem, 88,74.
 274.—Amalia Salas, ídem, 32,87.
 276.—Nicanor Balbontín, ídem, 57,46.
 277.—Federico Sáiz, ídem, 34,84.
 280.—Josefa Torre, ídem, 61,16.
 285.—José Toca, ídem, 40,04.
 286.—Bibiano Barrio, ídem, 40,13.
 288 A.—Tiburcio Polidura, ídem, 8,38.
 288 B.—El mismo, 22,12.
 292.—Amparo Corona, ídem, 76,81.
 301.—Consuelo Diestro, ídem, 172,91.
 302.—Emilio García, ídem, 6,48.

Santander, 23 de Junio de 1932.—El interventor de Hacienda, Enrique Esteban Rodríguez. 822

ANUNCIOS DE SUBASTAS

Regimiento de Infantería número 23

Deseando este Cuerpo instalar la calefacción para los locales del mismo, los señores a quienes interese remitirán al señor comandante mayor pliego cerrado de condiciones antes del día 10 de Julio próximo, fecha en que expira el plazo. El pliego de condiciones está expuesto en la Oficina de Mayoría del Cuerpo.

Ayuntamiento de Enmedio

El día quince del próximo mes de Julio, en la Casa Consistorial, y a las diez de la mañana, tendrá lugar la subasta de una parcela de terreno, sobrante de la vía pública, sita en el pueblo de Nestares, al sitio de El Coto, de unos cien metros cuadrados de superficie, solicitada por D. Fermín Gómez Gutiérrez, sirviendo de base para la misma el precio de ciento cincuenta pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento del vecindario.

Enmedio a veinticuatro de Junio de mil novecientos treinta y dos.—El Alcalde, Marcelino Novo de Vega.

PROVIDENCIAS JUDICIALES

Por la presente se hace saber al procesado en causa de este Juzgado de Palencia, número 45, de 1932, sobre estafa, Ramiro Diego Acebo, de 19 años de edad, soltero, alpargatero, últimamente domiciliado en Solares, hoy en ignorado paradero, que por auto de 21 de Mayo último se declaró concluso expresado sumario y se acordó su remisión a la Ilma. Audiencia provincial de Palencia, a donde deberá comparecer dentro del término de diez días, por medio de abogado y procurador que designará, bajo apercibimiento de hacérsele de los que se encuentren en turno, de oficio, y además le parará el perjuicio consiguiente.

Palencia a 24 de Junio de 1932.—El secretario judicial, Isidoro Páramo. 829

En virtud de lo ordenado por el señor juez de instrucción de este partido, en proveído de hoy, dictado en el sumario número 47, del corriente año, sobre desorden público, se cita a los sujetos conocidos por Cañezo y Velarde, cuyas demás circunstancias se ignoran, los cuales se hallaban en esta villa, calle del Dr. Encina, en las últimas horas de la noche del día diez y nueve del corriente mes y frente al local de la Sociedad recreativa «La Unión», donde se originó el incidente, para que comparezcan dentro del término de diez, a partir desde la publicación de la presente en el «Boletín Oficial de la Provincia», ante este Juzgado, con objeto de prestar declaración en dicho sumario, apercibiéndoles que, si no comparecieren, les parará el perjuicio correspondiente en derecho.

Potes, 23 de Junio de 1932.—El secretario judicial accidental, R. Piñal. 832

Don José Abréu Zumárraga, secretario del Juzgado municipal del distrito del Oeste, de esta ciudad,

Certifico: Que en el juicio de falta del que se hablará, ha recaído la sentencia cuyos encabezamiento y parte dispositiva dicen así:

Sentencia.—En la ciudad de Santander, a diez de Junio de mil novecientos treinta y dos, el Sr. D. José Balboa Cobo, juez municipal de bienes anteriores del distrito del Oeste, ha visto el anterior juicio verbal de faltas seguido contra Antonio Herrero Martín, de dieciséis años de edad y de ignorado paradero, por hurto de una zapata propiedad de la Compañía del Ferrocarril del Norte; y

Fallo: Que debo condenar y condeno a Antonio Herrero Martín en la pena de un día de arresto y en el pago de las costas del juicio.—Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.—José Balboa.

Y para que sirva de notificación al denunciado Antonio Herrero Martín, pongo la presente, para su inserción en el «Boletín Oficial de la Provincia», en Santander a 10 de Junio de 1932.—José Abréu. 817

Don José Abréu Zumárraga, secretario del Juzgado municipal del distrito del Oeste, de esta ciudad,

Certifico: Que en el juicio de faltas del que después se hablará, ha recaído la sentencia cuyos encabezamiento y parte dispositiva dicen así:

Sentencia.—En la ciudad de Santander, a veinticuatro de Junio de mil novecientos treinta y dos, el Sr. D. Antonio Trueba Cantolla, juez municipal, suplente, del distrito del Oeste, ha visto el anterior juicio verbal de falta

seguido contra Joaquín Azcárate Isasi, de veintiún años de edad y de ignorado paradero, por hurto de una caja de hierro y metálico a Ciriaco Valderrábano Gutiérrez; y

Fallo: Que debo condenar y condeno a Joaquín Azcárate Isasi en la pena de treinta días de arresto y en el pago de las costas del juicio. —Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. —Antonio Trueba.

Y para que sirva de notificación al denunciado Joaquín Azcárate Isasi, pongo el presente para su publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia», en Santander a veinticuatro de Junio de mil novecientos treinta y dos. —José Abreu. 833

ANUNCIOS OFICIALES

Junta vecinal de Tudanca

En poder del presidente de la Junta administrativa del pueblo de Tudanca se hallan prendados y puestos en custodia, con las señas siguientes, una yegua castaña, crín y cola larga, con V E en el cuarto derecho; una potra, roja careta, calzada de la pata izquierda y mano derecha, edad treinta meses, y otra potra castaña, calzada de la pata derecha, crín o cola larga, una estrella en la frente y labio, edad dos años; otra potra, castaña, calzada de la pata izquierda, careta, edad un año.

Y para que llegue el hallazgo a conocimiento de su dueño, se hace público, advirtiéndole que, pasados quince días desde la publicación de este edicto, sin que parezca el propietario, serán subastados dichos animales, y a su importe se dará el destino correspondiente.

Tudanca, 24 de Junio de 1932.—Jesús Martínez.

Ayuntamiento de Arredondo

Por término de quince días, y a los efectos de examen y reclamación, se hallan expuestos al público en esta Secretaría los apéndices al amillaramiento.

Arredondo a 22 de Junio de 1932.—El Alcalde, Hilario López.

Ayuntamiento de Astillero

La cuenta de Presupuestos y Depositaria correspondiente al año de 1931, con sus justificantes, quedan expuestas en la Secretaría municipal, durante quince días siguientes al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia» y ocho días más, dentro de cuales plazos podrán los vecinos formular por escrito los reparos que estimen procedentes.

Astillero, 22 de Junio de 1932.—El Alcalde, A. Quevedo.

Ayuntamiento de Anievas

Por término de quince días hábiles, y horas de diez a doce de la mañana, queda expuesto al público el padrón de Cédulas personales del año 1932, que debidamente rectificado, servirá para el actual ejercicio, debiendo el vecindario revisar en ese plazo sus clasificaciones y presentar las reclamaciones justificadas.

Anievas, 13 de Junio de 1932.—El Alcalde, Lucas Mantecón.

Ayuntamiento de Peñarrubia

Propuesto por este Ayuntamiento la habilitación de un crédito, dentro del presupuesto ordinario a que se refiere el expediente que al efecto se instruye, queda expuesto al público en la Secretaría municipal, por término de quince días, para que durante dicho plazo puedan formularse reclamaciones ante referido Ayuntamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de 23 de Agosto de 1924 y para general conocimiento.

Peñarrubia, 20 de Junio de 1932.—El Alcalde, Faustino Lamadrid.

Ayuntamiento de Laredo

Habiéndose solicitado de este Excmo. Ayuntamiento autorización para la plantación de un millón de eucaliptus en los terrenos que este Ayuntamiento posee en el Salvé, y acordada, en principio, por la Corporación, se anuncia al público por el plazo de quince días, durante los cuales se admitirán reclamaciones, así como las proposiciones y proyectos que se presenten para optar a la concesión.

Laredo, 25 de Junio de 1932.—El Alcalde accidental, R. Tramullas.

Ayuntamiento de Camargo

Por plazo de quince días, y a los efectos de su examen y reclamación, se hallan expuestos al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante las horas de oficina, los apéndices al amillaramiento de fincas rústicas y urbanas y el recuento de ganadería formados para el corriente ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Camargo a 20 de Junio de 1932.—El Alcalde, Silvio Fombellida.

Ayuntamiento de Villaverde de Trucíos

De conformidad con el Decreto del Ministerio de la Gobernación de 22 de Marzo último y con la circular que la Excmo. Diputación de la provincia publicó en el «Boletín Oficial» del día 8 de los corrientes, se va a proceder a la rectificación del padrón de cédulas personales de este Municipio que rigió en el año anterior de 1931, a fin de que sirva de base en el año actual para la exacción del referido impuesto.

Con tal motivo se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento el referido padrón de cédulas, para que durante los quince días siguientes a la publicación de este anuncio en el citado periódico oficial, de nueve a doce de la mañana y de tres a cinco de la tarde sea examinado por los contribuyentes y pueda reclamarse contra las clasificaciones con que en él figuran, cuando por variación de sus circunstancias contributivas tengan derecho debidamente justificado, a la pretendida modificación.

También se solicitarán en el mismo plazo las altas que procedan por adquisición de vecindad o por haber llegado a la edad en que obliga el impuesto, y las bajas por fallecimiento, traslado de residencia a otros Municipios y demás causas de excepción señaladas en el Estatuto provincial de 20 de Marzo de 1925.

Villaverde de Trucíos, 25 de Junio de 1932.—El Alcalde, José Pando.